



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE	Luis Albeiro Arias Gil
DEMANDADO	Herederos determinados de Orlando de Jesús Gómez
RADICADO	05360 31 03 001 2002 00376 04
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por el cesionario Jorge Ignacio Uribe Velásquez, en el asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. El cesionario Jorge Ignacio Uribe Velásquez presentó solicitud de nulidad del proceso a partir del auto de 18 de octubre de 2016. Como sustento de lo pedido, adujo que se configuró la causal prevista en el numeral 2 del artículo 133 del C.G.P. y la descrita en el artículo 29 de la Constitución Política, al haberse omitido deliberadamente por el despacho lo resuelto en auto de 18 de octubre de 2016.

Refirió que presentó demanda laboral frente a Luis Albeiro Arias Gil porque no le canceló los honorarios profesionales acordados en un contrato de prestación de servicios. Dicho proceso culminó con acuerdo conciliatorio en que se dispuso que el señor Arias Gil cancelaría el valor de las costas y el 30% de la totalidad de la condena. Expuso que el acta de conciliación fue arrimada al proceso ejecutivo y en auto de 18 de octubre de 2016 se dispuso que una vez rematado el bien inmueble embargado, se pagaría la totalidad del crédito que tiene a su favor, en virtud de la prelación crediticia que le asiste. No obstante, mediante providencias de 17 de enero y 8 de junio de 2020 se ordenó pagar primero al fisco y se determinó que el crédito del cesionario era quirografario; sin que se haya tenido en cuenta que el juez no podía variar o revocar una providencia que había quedado ejecutoriada.

1.2. En proveído de 10 de junio de 2021 el Juzgado 001 Civil del Circuito de Itagüí rechazó de plano la solicitud de nulidad. Como fundamento de la decisión señaló que, en virtud de lo establecido en el inciso 4 del artículo 135 del C.G.P.,

en concordancia con el numeral 2 del artículo 43 ibídem, lo procedente sería el rechazo de la petición, en tanto, ninguna de las causales invocadas estaba relacionada con los argumentos presentados, pues el solicitante insistió en que su crédito sea calificado como laboral y por ende, le sea ordenada la entrega de dineros por encima de los demás créditos, lo que es improcedente, pues de los argumentos brindados por el despacho sobre el particular, no allegó el interesado argumentaciones jurídicas distintas.

1.3. Inconforme con la decisión el cesionario Jorge Ignacio Uribe Velásquez interpuso recurso de apelación con el fin de que la providencia fuera revocada y en su lugar se accediera a la petición de nulidad. Como cimienta de lo solicitado, el recurrente arguyó que en auto de 18 de octubre de 2016 se determinó que su acreencia era de carácter laboral, por lo cual, tenía prevalencia sobre los demás créditos. Anotó que el juez incurrió en una incongruencia pues *“la causal de nulidad invocada en el escrito de nulidad corresponde a la causal 2 del artículo 312 del C.G.P.”*. Expuso que no puede predicarse el saneamiento de la nulidad, toda vez que, en varias ocasiones se ha indagado al despacho a fin de que efectúe un pronunciamiento al respecto, empero, siempre ha evadido el tema.

Apuntó que el juez erró al indicar que lo pretendido por el cesionario era que su crédito fuera calificado como laboral, pues dicha afirmación es contraria a la realidad, debido a que, mediante auto de 18 de octubre de 2016 se calificó la acreencia como laboral y se le dio una prelación de tal estirpe por encima de todos los demás créditos, no obstante, se dijo que se pagaría una vez fuera allegada la liquidación del crédito. Afirmó que las razones de hecho y de derecho expuestas por el *a quo* no pueden prosperar porque la nulidad alegada sí se encuentra enlistada expresamente en la ley y en la constitución.

1.4. Surtido el traslado del recurso, la contraparte se pronunció en el sentido de solicitar que se mantuviera incólume la decisión. Para tal efecto, precisó que el cesionario insiste en el presente asunto desde hace mucho tiempo, pues en el expediente archivo digital 21 folio 1303 consta que desde enero de 2020, fecha en que presentó recurso de reposición y en subsidio apelación frente al auto de 17 de enero de 2020, ha tocado el mismo tema, en esa fecha pretendió que le dieran prevalencia sobre el fisco, es decir, sobre la acreencia en favor de la DIAN y mediante auto de 20 de febrero de la misma anualidad el despacho resolvió desfavorablemente el recurso. A partir de ese momento en vista de que la posición del titular del juzgado era diferente a la de él y que no acogió los argumentos expuestos, el señor Uribe Velásquez ha presentado en

múltiples ocasiones, gran variedad de escritos con la misma pretensión, esto es, que se le prefiera por encima de los demás acreedores porque considera que su crédito es laboral y no civil, escritos que han sido resueltos todos en forma contraria a los intereses de él.

Adujo que la calificación de un crédito como laboral se desprende directamente del tipo de relación, pues es necesario que haya existido una relación laboral, materializada mediante contrato de trabajo, configurado con sus elementos esenciales, a saber, 1. Prestación personal del servicio, 2. Remuneración y 3. Subordinación. En el presente caso, la relación entre los señores Uribe Velásquez y Arias Gil, fue una relación de tipo civil, materializada mediante contrato de prestación de servicios sin la existencia de subordinación, razón por la cual el crédito no es de orden laboral, por el contrario, es civil y apuntó que en el acta de conciliación arrimada no se calificó el crédito como laboral.

2. CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 29 de la Constitución Política establece el derecho al debido proceso y trae consigo una causal de nulidad que se concreta en la obtención de pruebas con violación del debido proceso. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”(subraya fuera de texto).

2.2. Por su parte, el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso prevé lo siguiente:

"ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. ...

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

...

3. CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al rechazar la nulidad formulada por el cesionario Jorge Ignacio Uribe Velásquez, en tanto, no encontró configuradas las causales de nulidad alegadas.

Al respecto, esta dependencia judicial encuentra ajustado a derecho lo definido por la autoridad judicial de primera instancia, porque, de acuerdo con las normas acabadas de citar, en el presente caso no se acreditó los presupuestos para la declaratoria de nulidad planteada por el recurrente. En efecto, la nulidad constitucional de que trata el artículo 29 de la carta magna, se configura cuando se obtiene pruebas con violación del debido proceso, es decir que tiene cabida cuando en un proceso se recauda elementos materiales probatorios sin la observancia de las reglas propias del procedimiento establecido, circunstancia que en este caso no ocurre, pues lo debatido aquí no se circunscribe a la obtención de los medios persuasivos obrantes en un proceso.

En relación con esta temática, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de diciembre de 2005 señaló que:

"Ahora, la fijación del régimen de las nulidades es un asunto que, en línea de principio, es del resorte del legislador, que indica, según los criterios antes señalados, las causales que las generan, tal como quedó consignado en el citado artículo 140 [hoy 133 del CGP], atendiendo, claro está, los principios y garantías constitucionales, de los que son finalmente una nítida expresión.

En todo caso, es de verse también que el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política establece que "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso", nulidad de orden superior que, como lo indicó la Corte Constitucional en sentencia C.491 de 1995, viene a sumarse a las demás y puede invocarse cuando sea el caso".

Por otro lado, el cesionario recurrente alegó la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso, no obstante, los argumentos planteados no sustentan dicha causal, pues tal norma prescribe que habrá nulidad cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la instancia. Sobre este punto, como bien estimó el juez de primer nivel, la causal no se probó porque la providencia que presuntamente fundamenta la pretensión del recurrente, esto es, el auto de 18 de octubre de 2016, si bien se encuentra ejecutoriado, no proviene de superior funcional, por lo cual, no podría hablarse de nulidad por proceder contra providencia ejecutoriada del superior; de igual modo, en este caso no se revivió un proceso legalmente concluido, pues según puede observarse la ejecución no ha concluido; y finalmente, con la decisión cuestionada no se pretermitió ninguna instancia.

En síntesis, las causales de nulidad procesal y constitucional alegadas por el señor Uribe Velásquez, no encuentran apoyo en el trámite seguido, por lo cual, la decisión proferida el 10 junio de 2021 por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Itagüí, será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 10 de junio de 2021, proferida por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Itagüí.

SEGUNDO. Se condena en costas del recurso a la parte recurrente y como agencias en derecho se fija la suma de un millón de pesos que equivale a 1 SMLMV.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada